

Por Nicole Peña

En Londres desde 2019, el candidato a doctor en Ciencia Política y miembro del Instituto Milenio para la Investigación en Violencia y Democracia, Diego Sazo, observa la crisis de seguridad por la que atraviesa el país. A su juicio, el estallido social y la pandemia desplazaron la preocupación en la materia, mientras las bandas ganaban terreno silenciosamente. El recrudescimiento de los métodos violentos, el aumento y sofisticación en el uso de armas y la confrontación del crimen organizado con la policía, son parte del fenómeno actual.

-Tras las balaceras que dejaron a nueve fallecidos a mediados de julio, la ministra Camila Vallejo destacó que seguimos estando mejor que el barrio. ¿Es así?

-Después de la pandemia la criminalidad aumentó en todos los países. Sobre sí Chile se mantiene como uno de los países más seguros y con menores tasas de homicidios en relación al barrio, sí, pero la métrica cambia si nos comparamos con países de la OCDE o con nosotros mismos hace años atrás. Hoy las cifras son mucho más altas y eso es motivo de preocupación. No es consuelo decir que seguimos siendo uno de los países más seguros de la región.

-En Puente Alto desarticularon una toma donde narcos proveían servicios a la comunidad e incluso un "colegio". ¿Estamos a tiempo de revertir eso o el narco ya está asentado?

-Las teorías afirman que el mejor crimen organizado es el que hace menos ruido, el que menos se ve. Este auge de la violencia criminal de los últimos cuatro años tiene que ver con reacomodos de la dinámica criminal. Las dinámicas de producción y tráfico de droga se movieron desde la zona norte de América del Sur hacia el cono sur y eso generó consumo, tráfico y violencia asociada en países como Ecuador, Perú, Chile y en menor medida Argentina. Casos como el de Puente Alto muestran que en algunos sectores donde el Estado se ha retirado o incluso ha sido cooptado se está generando cierto establecimiento o tranquilidad. Quizás donde vemos menos violencia, no necesariamente indica que no estemos frente a dinámicas de crimen, sino que ya se ha asentado y está operando tras bambalinas.

-¿Llegamos a un punto de no retorno?

-Me parece que todavía estamos lejos de situaciones como Colombia o México. Si tuviera que jugarla diría que todavía estamos en un punto de control. Veo a un gobierno que a pesar de que muchas veces suele ser reactivo en estos temas, está actuando y tomando decisiones que muchas veces le generan incluso tensiones internas, y poniendo al día la legislación.

"Hay que apuntar al negocio que operan"

-¿Cuáles son los lugares emblemáticos de éxito en el combate al crimen or-



Diego Sazo:

"Hay una condición de este Gobierno que dificulta su gestión en seguridad"

"Cuando hay coyunturas de seguridad, la coalición de gobierno a regañadientes logra ordenarse", plantea el experto en seguridad.

ganizado y qué estrategia siguieron?

-Los casos se relacionan esencialmente a estrategias de rediseño urbano para terminar con la marginalización que permite la proliferación de enclaves criminales, donde poblaciones se sientan integradas a las ciudades en su desarrollo. Cuando el Estado falla y otro provee servicios sociales, se genera una dinámica de dependencia que hay que cortar. Acciones que se han visto en países como Italia o en ciudades como Medellín tienen que

ver con políticas de tolerancia cero a la corrupción; muerte cívica a la corrupción estatal tanto de funcionarios policiales como civiles. Y algo muy importante son las campañas de conciencia cívica; no he visto nada de eso en Chile. Toda la proliferación de mercados ilegales, ya sea tráfico de drogas, venta de vehículos, medicamentos, todo eso opera, se mantiene y reproduce porque tiene una demanda que lo alienta. El despliegue de militares en la frontera sirve para controlar el problema; las políticas de encarcelamiento selectivo y el control de la migración irregular son necesarias, pero también lo es la prevención. Hay que apuntar al negocio que este tipo de grupos opera y a la cooptación de funcionarios estatales.

-La contralora (s) ha advertido el riesgo de que el narco penetre la institucionalidad. ¿Podríamos estar ante esa realidad ya? Hace años vimos el caso de San Ramón.

"No es consuelo decir que seguimos siendo uno de los países más seguros de la región, porque objetivamente la violencia ha crecido"

-El riesgo de captura del Estado está siempre presente, sobre todo cuando el negocio es tan lucrativo. Una de las medidas es el secreto bancario de funcionarios públicos, incluyendo gendarmería, alcaldes, administradores municipales... todos aquellos cargos que tienen mucho poder en las decisiones.

-Cada vez que ocurren incidentes de connotación pública el Gobierno anuncia medidas. Por ejemplo, el plan calles sin violencia en abril del 2023, tras el asesinato de un carabinero. Sin embargo, un estudio de LyD arrojó que solo se ha ejecutado 16% del presupuesto.

-El Gobierno enfrenta un dilema fatal que tiene que ver con la conformación de su coalición. Cuando han existido coyunturas críticas, como la muerte de los tres carabineros, la coalición a regañadientes logra ordenarse. Mientras la contingencia presiona por eso, hacen fast track de políticas de seguridad, pero luego hay un sector del oficialismo que comienza a tomar distancia. Esa es una permanente condición de este Gobierno que dificulta su gestión en la gobernanza de la seguridad. La política de seguridad nunca ha generado consenso al interior de las alianzas de izquierda. Los costos los asume el socialismo democrático, pero el Gobierno tiene dos almas y necesita de la otra para poder salir adelante en este tipo de coyuntura. Tampoco ayuda la oposición a iniciativas como el levantamiento del secreto bancario con condiciones.

-Investigadores también han apuntado a una dificultad para acceder a datos desagregados...

-No hablaría de opacidad en las cifras. Lo que sí es un desafío es la consolidación de todas las cifras que tienen que ver con seguridad, lo que se llamó el banco unificado de datos. Si no hay una coordinación fina de los datos es muy difícil poder formular políticas públicas ciertas.

-Durante Bachelet 2 usted fue asesor de Interior y el fenómeno migratorio ya había comenzado. ¿No vieron venir la posibilidad de que con ello ingresaran bandas criminales?

-Los contextos son distintos. Cuando estábamos en el gobierno la migración venezolana no era la principal. El éxodo viene en 2018.

-Pero ya venía en aumento.

-Sí, en 2015-2016 empieza a haber mayor flujo de migrantes, pero en esa época la ley de migración que existía era la misma desde el régimen militar. El origen del tren de Aragua se ve después del éxodo venezolano, pero me parece difícil hacer una evaluación desde el presente.